

FOREIGN AFFAIRS

LATINOAMÉRICA

VOLUMEN 23 • NÚMERO 1

ENERO-MARZO 2023

Elecciones presidenciales en Latinoamérica

Cita recomendada:

Zovatto, Daniel, (2023) "Elecciones presidenciales en Latinoamérica", *Foreign Affairs Latinoamérica*, Vol. 23: Núm. 1, pp. 10-24. Disponible en: www.fal.itam.mx

Elecciones presidenciales en Latinoamérica

Parte central del superciclo 2021-2024

📍 *Daniel Zovatto*

Con el inicio de la tercera década del siglo XXI arrancó un nuevo superciclo electoral en Latinoamérica, durante el cual todos los países de la región, con excepción de Bolivia (cuyas elecciones tuvieron lugar en octubre de 2020), renoverán sus presidencias y congresos por voto directo, universal y secreto. Estas elecciones ocurrirán en tiempos nublados, pues se solapan múltiples crisis internacionales y regionales: la pandemia de covid-19 y sus secuelas que no han desaparecido, la invasión rusa a Ucrania —que somete a una prueba de alto voltaje al entramado político-institucional del siglo XX (democracia representativa y organizaciones internacionales liberales)—, los altos niveles de inflación y el acelerado aumento de las tasas de interés, el encarecimiento de la energía, los alimentos y la vida en general, y la inseguridad alimentaria, entre otros.

Estas múltiples crisis han profundizado las desigualdades, la pobreza y la pobreza extrema, han aumentado la desconfianza de la ciudadanía en las élites y han agudizado el malestar social en las calles (protestas) y en las urnas (voto de castigo a los oficialismos). Todo ello ha hecho emerger una nueva agenda: reformar el capitalismo y la globalización, dar respuesta a los desafíos del cambio climático, avanzar en materia de equidad de género e inclusión, y adaptarse rápidamente a la digitalización y a la Cuarta Revolución Industrial. En la irrupción de esta nueva agenda —reflejo de una sociedad que cambió durante los últimos años, sobre todo las nuevas clases medias, la juventud y las mujeres—, las élites tradicionales se han visto sobrepasadas por su incapacidad para interpretarla y reposicionarse en el nuevo escenario. De ahí la urgencia de renovar los estilos de liderazgo político, recuperar la confianza ciudadana en la política, repensar la democracia, relegitimar sus instituciones y renegociar los contratos sociales.

En la tabla 1 se observa el intenso maratón electoral que tendrá lugar durante este cuatrienio 2021-2024 y que reacomodará el mapa político regional.

DANIEL ZOVATTO es Director Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Sígalo en Twitter en @Zovatto55.

Tabla 1: Calendario de elecciones presidenciales del superciclo 2021-2024			
Año de elecciones			
2021	2022	2023	2024
Ecuador Primera vuelta: 7 de febrero Segunda vuelta: 11 de abril	Costa Rica Primera vuelta: 6 de febrero Segunda vuelta: 3 de abril	Paraguay 30 de abril Guatemala Primera vuelta: 25 de junio Segunda vuelta: 20 de agosto	El Salvador Primera vuelta: 4 de febrero Segunda vuelta: 3 de marzo Panamá 5 de mayo
Perú Primera vuelta: 11 de abril Segunda vuelta: 6 de junio	Colombia Primera vuelta: 29 de mayo Segunda vuelta: 19 de junio	Argentina Primera vuelta: 15 de octubre Segunda vuelta: Noviembre	República Dominicana Primera vuelta: 19 de mayo Segunda vuelta: 30 de junio
Nicaragua 7 de noviembre	Brasil Primera vuelta: 2 de octubre Segunda vuelta: 30 de octubre		México 2 de junio
Honduras 28 de noviembre			Uruguay Primera vuelta: 27 de octubre Segunda vuelta: 24 de noviembre
Chile Primera vuelta: 21 de noviembre Segunda vuelta: 19 de diciembre			Venezuela Diciembre

FUENTE: Elaboración propia con base en los calendarios electorales de cada país.

EL CONTEXTO DEL SUPERCICLO ELECTORAL

El superciclo electoral es un periodo de 4 años (de 2021 a 2024) durante el cual diecisiete países de Latinoamérica celebrarán elecciones presidenciales, legislativas y locales con las que se renovará a las autoridades políticas y se configurará un nuevo mapa político. Este superciclo tiene lugar en uno de los momentos más complejos desde el regreso de la democracia en 1978 (tercera ola democrática), como consecuencia del impacto socioeconómico de la pandemia, la erosión de la confianza en la democracia y el deterioro de la calidad de las instituciones, y va a desarrollarse en tres contextos: económico, institucional y de cultura política.

Contexto económico: crecimiento anémico, inflación y tasas de interés al alza, y nuevas tensiones sociales

La región se encamina a otra década perdida (2014-2023). El último pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), de octubre de 2022, es que Latinoamérica crecerá 3.5% en 2022, lo que representa una reducción a la mitad, ya que en 2021 el crecimiento fue de 6.9% (el rebote después de la pandemia) y, en 2023, se espera que se contraiga nuevamente a la mitad, a 1.7%. En el citado informe se proyecta un panorama de contracción en la región superior al promedio mundial, pues se anticipa un crecimiento de 2.7% del PIB para 2023.

Entre los factores que explican este anémico crecimiento económico se destacan las restrictivas condiciones macroeconómicas mundiales: la elevada inflación, el incremento de las tasas de interés y la contracción monetaria, el aumento del precio de las materias primas así como el de las medicinas y los combustibles y el debilitamiento de la demanda, entre otros.

La recuperación después de la pandemia ha sido heterogénea. En el hemisferio, en 2021 y 2022 crecieron apresuradamente ciertos países, como Chile, Colombia o Perú, mientras que otros, como Argentina, Brasil o México, tuvieron una recuperación más gradual. Para 2023, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que tres de las seis principales economías de la región (Argentina, Brasil y México) tendrán un crecimiento económico inferior al promedio regional: 1.4%. Chile entrará en recesión. Colombia y Perú son las excepciones, con un crecimiento previsto de 1.9% y 2.2%. Las proyecciones del FMI para 2023 son ligeramente más optimistas. En un escenario con escasos ingresos, los gobiernos tendrán que hallar el equilibrio entre mantener la estabilidad macroeconómica, no perder la confianza del mercado, cuidar la cohesión social y evitar nuevos estallidos sociales.

En el corto plazo, la inflación se ha convertido en el principal problema económico que enfrenta América Latina. Según el FMI, 2022 termina con una inflación de 14.6%, y si bien en 2023 bajará a 9.5%, se trata de una de las tasas más altas de los últimos 25 años. Como sostuvo el Director Adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk: “Por cada aumento de 10% del precio internacional de los alimentos y la energía, se estima que aumente 2% la inflación general de Latinoamérica”. De esta manera, el impacto inflacionario será peor en las economías en las que los alimentos y la energía importados tengan una participación mayoritaria en el consumo de los hogares, como Centroamérica y República Dominicana.

Entre tanto, la persistente alza de los precios puede reactivar las tensiones sociales, ya experimentadas en 2019 y que se vieron suspendidas por las prohibiciones de movilidad impuestas por las autoridades para controlar la pandemia de covid-19, pero ahora reavivadas por un contexto internacional recesivo, de freno a la llegada de capitales por aversión al riesgo, encarecimiento del crédito internacional para los gobiernos y crecimiento de la deuda externa. Para poder atender los decrecientes ingresos y hacer frente a las adversidades internacionales, los gobiernos han comenzado a retirar las generosas políticas de asistencia implantadas durante la pandemia. Estos recortes, si bien ayudan a equilibrar las cuentas fiscales, introducen nuevas tensiones en

el mediano plazo. Así, hay preocupación de que se incrementen las manifestaciones sociales en las calles por los debilitados salarios que no alcanzan para cubrir la inflación y, en casos como Argentina, Chile y Colombia, para compensar la devaluación de las monedas regionales, que deteriora considerablemente el poder adquisitivo.

Estos pronunciados desequilibrios económicos tienen graves efectos sobre los indicadores sociales. En su informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022”, de noviembre de 2022, la CEPAL estimó que la pobreza, que alcanzaba en 2018 a 29.8% de la población, a finales de 2022 se situará en 32.1% (201 millones de personas), en tanto que la pobreza extrema pasará de 10.4% en 2018 a 13.1% (82 millones). Estas cifras significan que serán pobres 15 millones de personas más que antes de la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será de 12 millones más que en 2019. Estos niveles proyectados de pobreza extrema representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región. Además, la desigualdad de ingresos (medida por el coeficiente de Gini) se ubica en niveles similares a los de 2019, 0.458, mientras que la desocupación tiene un fuerte incremento (pasa de 9.5% en 2019 a 11.6% en 2022), lo que representa un retroceso de 22 años. Como advierte el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, el panorama es muy preocupante, ya que “no se ha logrado revertir las secuelas de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema, y en educación los países enfrentan una crisis silenciosa que afecta el futuro de las nuevas generaciones”.

Otra consecuencia de las actuales condiciones económicas es el aumento de la inseguridad alimentaria. De acuerdo con el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022” de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cuatro de cada diez latinoamericanos sufren privaciones graves o moderadas de alimentos, una tendencia que muestra un aumento constante desde 2014. El Caribe presenta las mayores cifras de población malnutrida (16%), mientras que en Sudamérica se duplicó la cifra desde 2015.

Como se aprecia, los retos económicos por las crisis sucesivas y el aumento de las demandas sociales harán indispensable llevar a cabo reformas estructurales (tributarias, laborales, de las pensiones, financieras, salud, etc.) que pondrán a prueba no solo la pericia técnica de los equipos económicos, sino también la capacidad estratégica de los gobiernos para lograr acuerdos sociales y políticos amplios que las hagan viables. La creación y el sostenimiento de espacios democráticos de diálogo y concertación se tornan indispensables para la gobernabilidad democrática en un contexto de mayor volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad.

Contexto institucional: erosión democrática y debilitamiento del Estado de derecho

En todo el mundo la democracia está en recesión y atraviesa su peor momento de los últimos 30 años. Los principales estudios internacionales de calidad de la democracia dan cuenta del marcado aumento del número de gobiernos autoritarios y del notable retroceso democrático. En el cuarto informe de IDEA Internacional sobre “El estado de la democracia en el mundo”, de noviembre 2022, se alerta que la democracia está bajo asalto en todo el mundo: en la mayor parte de los países sufre acoso, en otros

está estancada y en un tercer grupo se encuentra en claro retroceso. Se señala, asimismo, que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo están en declive, mientras que los regímenes autoritarios aumentan y se vuelven más represivos. Como consecuencia, más de dos tercios de la población mundial viven ahora en democracias en retroceso o en regímenes híbridos y autoritarios. El informe del proyecto v-Dem de la Universidad de Gotemburgo (2022) señala que las democracias liberales alcanzaron un máximo de 42 países en 2012, que al presente se han reducido a 34, el número más bajo de los últimos 25 años. Según datos de Freedom House (2022), mientras que en 2005 46% de la población vivía en países libres, ese porcentaje se redujo en nuestros días a 20.3%. Y de acuerdo con el informe de la Unidad de Inteligencia de *The Economist* (2022), 44% de los países del mundo empeoraron su calificación democrática promedio en 2021 respecto de 2020.

En Latinoamérica la tendencia es similar y se caracteriza por una preocupante y gradual erosión democrática desde hace poco más de una década. La pandemia aceleró el deterioro político e institucional y sirvió para que líderes populistas la tomaran como excusa para ejercer facultades de emergencia, con el fin de concentrar poder de manera ilegítima y suprimir derechos y libertades básicas de la población, como se narra en el Monitor Global de IDEA Internacional de 2021.

La democracia enfrenta un nuevo tipo de autoritarismo. En nuestros días, las democracias ya no mueren como consecuencia de los tradicionales golpes de Estado militares —si bien aún se dan en algunas regiones y países—, sino por el deterioro gradual y sistemático de sus pilares básicos, provocado desde el propio régimen por gobernantes electos.

Los últimos 3 años (de 2019 a 2021) han sido aún más difíciles para las democracias latinoamericanas. Según *The Economist*, en 2021 Latinoamérica registró la caída más pronunciada en los parámetros democráticos en comparación con el año anterior y pasó de 6.09 a 5.83 puntos, un descenso que ocurre por sexto año consecutivo. Solo una democracia latinoamericana recibió las mejores opiniones en los cuatro informes citados: Uruguay. Por su parte, Costa Rica y Chile, aunque permanecen como el segundo y el tercer país mejor evaluados en la región, han presentado indicios de retroceso en algunos atributos democráticos.

Una de las principales causas históricas y transversales que han impedido la consolidación de la democracia latinoamericana es el débil Estado de derecho, que considero el talón de Aquiles de la región. Así lo consigna el reciente Índice de Estado de Derecho 2022 del Proyecto de Justicia Mundial que mide, con un conjunto de variables, el Estado de derecho en el mundo. En 2022, los países latinoamericanos tuvieron un desempeño medio-bajo, con serias deficiencias en materia de “orden y seguridad”, ausencia de corrupción y justicia criminal. Respecto a 2021, solo tres países mejoraron su calificación —Costa Rica, Honduras y República Dominicana—, mientras que en el resto la situación empeoró sustancialmente. Haití, Nicaragua, El Salvador y Bolivia son los países donde más desmejoró el Estado de derecho en 2022.

En cuanto a la corrupción, las noticias tampoco son alentadoras. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional no hay

movimiento desde hace 6 años, con una evaluación también media-baja de 43/100 para Latinoamérica. Esto significa que, más allá de algunas actualizaciones normativas, los esfuerzos por combatir la corrupción efectiva, diaria y en todos los niveles son ínfimos o insuficientes.

Una de las libertades que se ve más afectada como consecuencia de la acción de gobiernos autoritarios o regímenes híbridos es la de prensa y de expresión. Estos gobiernos, ayudados por la creciente digitalización y el mal uso de las redes sociales (campañas de contaminación informativa), han incrementado los ataques y la persecución a los periodistas y los medios de comunicación. La Sociedad Interamericana de Prensa señala en su último informe de octubre de 2022 que el índice de libertad de prensa y expresión bajó casi 2% respecto al año anterior, debido a la creciente persecución y censura de periodistas, así como por los actos de violencia impune contra los trabajadores de los medios de comunicación.

En general, la violencia se ha convertido en un gravísimo problema pues uno de cada cuatro (25%) homicidios violentos en el mundo ocurre en Latinoamérica, aunque tiene solo 8.6% de la población. Los últimos 2 años han sido negativos para la seguridad humana. De acuerdo con un estudio de InSight Crime, la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes aumentó de 15.6 en 2020 (a pesar que había confinamientos por la pandemia) a 19.1 en 2021. Desde 2000, más de 2.6 millones de ciudadanos han sido víctimas de la violencia y la inseguridad ciudadana. En Venezuela (40.9), Honduras (38.6), Colombia (26.8) y México (26) la tasa de homicidios es superior a la regional. De las 50 ciudades más inseguras del mundo, 38 están en Latinoamérica.

Uno de los factores de la inseguridad reinante es la delincuencia organizada transnacional y sus estructuras de lavado de dinero y finanzas que corroen el Estado de derecho y la legitimidad democrática. De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado, en Latinoamérica se encuentran 10 de los 31 países que más sufren las consecuencias de estos delitos. Además, la mayoría de estos países carecen de las capacidades institucionales para luchar contra los ejércitos privados que generan grandes economías ilícitas, por trasiego de cocaína y oro, minería ilegal, tráfico de armas y de personas.

Estos niveles de violencia e inseguridad han sido uno de los principales impulsores del aumento de la migración. Otro han sido las dictaduras y la intensificación de las políticas de represión en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que generaron una crisis humanitaria sin precedentes y llevaron la emigración a cifras récord. Según la Organización Internacional para las Migraciones, Latinoamérica pasó de 6.6 a 14.8 millones de migrantes. Los migrantes caribeños y centroamericanos ven a Estados Unidos como principal país de destino, mientras que los sudamericanos, especialmente los 7.1 millones de venezolanos, han optado por países latinoamericanos o europeos, aparte de Estados Unidos.

Cultura política: desconfianza en las instituciones democráticas

En la región hay dos grandes encuestas que le toman el pulso a la opinión de los ciudadanos: el Barómetro de las Américas (BA) y el Latinobarómetro (LB). En ambas, el

apoyo a la democracia se ha reducido en los últimos años, de 69% en 2008 a 62% en 2021 (BA) y de 63% en 2010 a 49% en 2020 (LB). La satisfacción con la democracia se ubicó en 43% en 2021, en comparación con 59% en 2010 (BA). Asimismo, 73% de los encuestados en 2020 dijo que “se gobierna para grupos poderosos en beneficio propio” (LB).

Otros cuatro datos agravan las preocupaciones. El primero, mientras que en 1995 solo 16% de los latinoamericanos afirmaban que les daba igual vivir o no en una democracia, en 2021 el número llegó a 27% (LB). Esta indiferencia se traduce en una tolerancia a formas no democráticas de gobierno.

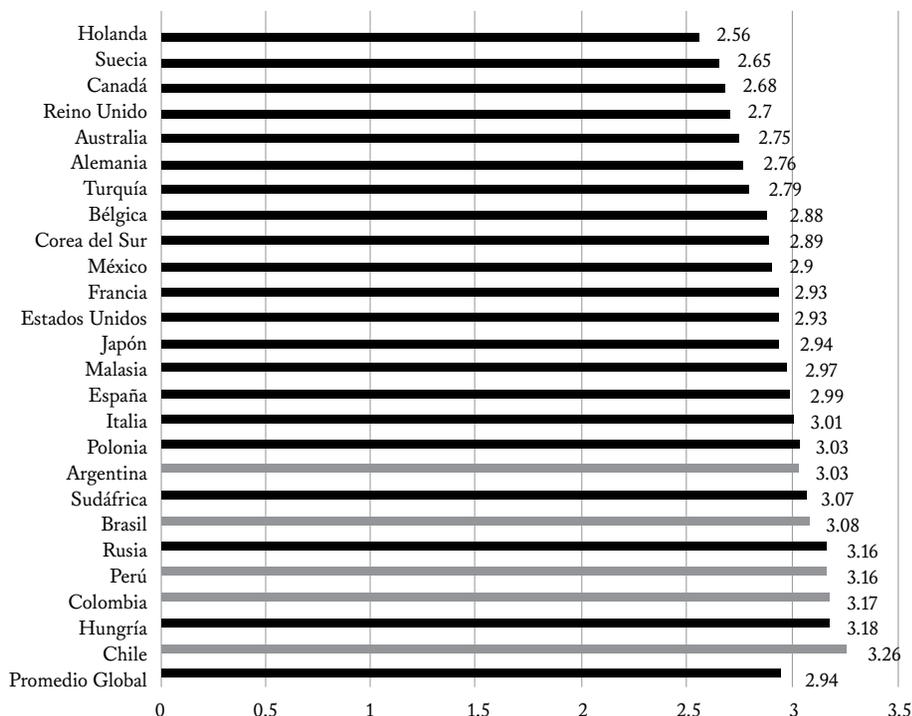
En segundo lugar, 51% de la población (44% en 2002) dice que no le importa si un gobierno no democrático llega al poder, si es que resuelve sus problemas (LB). En la misma y preocupante sintonía, mientras en 2010 solo 14% de los latinoamericanos toleraría un golpe del ejecutivo para concentrar poder y eliminar el legislativo, en 2021 el número llegó a 30% (BA).

El tercer dato es que la crisis de credibilidad está afectando no solo a las instituciones democráticas tradicionales, sino también al régimen en general y a la confianza entre personas. La confianza en los partidos políticos continúa en su piso más bajo (13%) y la del Congreso se encuentra en 20% (LB). Por su parte, la confianza en el ejecutivo, que era de 47% en 2006, tocó en 2020 el punto más bajo al ubicarse en 32% (LB). La confianza entre personas también se redujo notablemente en esta última década, pues pasó de 22% en 2010 a 12% en 2021, lo que constituye una alerta importante, como lo señalan Philip Keefer y Carlos Scartasini.

Y el cuarto, la confianza en las instituciones electorales es solo de 31% (LB). En este sentido, resulta alarmante que luego de 40 años de democracia en la región, solo en Chile y Uruguay la mayoría de los encuestados consideran que los votos emitidos se cuentan correctamente, mientras en los demás países tienen serias dudas sobre la integridad de los procesos electorales (BA).

En otra investigación de opinión pública mundial elaborada por IPSOS en 2021, se advierte acerca del riesgo que representan el creciente sentimiento antisistema y la llegada de nuevos líderes populistas. La encuesta incluye a las seis economías latinoamericanas más grandes entre veintiséis países encuestados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú). En promedio, 64% de los entrevistados consideran que “el país necesita un líder fuerte que lo saque de las manos de los ricos y los poderosos”. Colombia, con 77%, Chile, con 74%, y Brasil, con 72%, se ubican segundo, tercero y cuarto lugar. En otro aspecto, pero que concuerda con la sensación de rechazo a los actores principales del sistema, mientras el promedio mundial de quienes consideran que “los partidos políticos tradicionales y los políticos no se preocupan de personas como yo” es de 68%, cuatro países latinoamericanos están entre los primeros cinco lugares en ese reactivo (Colombia 85%, Chile 84%, Perú 81% y Brasil 78%). Finalmente, como se muestra en la gráfica 1, en el índice de populismo hay cinco países latinoamericanos (en gris claro) en los siete primeros lugares. Por eso es cada vez mayor la posibilidad de que en varios países de la región lleguen a la presidencia opciones lideradas por candidatos populistas y antisistema.

Gráfica 1: Índice de populismo, 2021



FUENTE: IPSOS Global Advisor, agosto de 2021.

TENDENCIAS ELECTORALES 2019-2022 EN LATINOAMÉRICA

Nuestro análisis de las principales tendencias abarca las elecciones presidenciales que tuvieron lugar entre 2019 y 2022, periodo que comprende el fin del superciclo anterior, la pandemia de 2020 y los 2 primeros años del actual superciclo. Estos 4 años comprenden seis elecciones presidenciales celebradas en 2019, antes de que iniciara la pandemia en 2020: El Salvador, Panamá, Guatemala, Argentina, Uruguay y Bolivia.

Las elecciones bolivianas de 2019 se anularon por graves irregularidades y se repitieron con normalidad en 2020. En ese año, en pleno pico de la crisis sanitaria, también se llevaron a cabo elecciones generales en República Dominicana. El año siguiente, 2021, se realizaron cinco elecciones presidenciales: Ecuador, Perú, Chile, Honduras y la farsa electoral perpetrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. En 2022 se celebraron tres elecciones presidenciales: Costa Rica, Colombia y Brasil. De las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante este lapso se desprenden siete principales tendencias electorales.

Tabla 2: Voto de castigo a los oficialismos, 2019-2022

País	Fecha de las elecciones	Presidente anterior	Presidente actual	Resultado
El Salvador	3 de febrero de 2019	Salvador Sánchez Cerén ▲	Nayib Bukele ●	Alternancia
Panamá	5 de mayo de 2019	Juan Carlos Varela ■	Laurentino Cortizo ●	Alternancia
Guatemala	16 de junio de 2019 11 de agosto de 2019	Jimmy Morales ■	Alejandro Giammattei ■	Alternancia
Argentina	27 de octubre de 2019	Mauricio Macri ■	Alberto Fernández ▲	Alternancia
Uruguay	27 de octubre de 2019 24 de noviembre de 2019	Tabaré Vázquez ▲	Luis Lacalle Pou ■	Alternancia
República Dominicana	5 de julio de 2020	Danilo Medina ●	Luis Abinader ■	Alternancia
Bolivia	18 de octubre de 2020	Jeanine Áñez ■	Luis Arce ▲	Alternancia
Ecuador	7 de febrero de 2021 11 de abril de 2021	Lenín Moreno ●	Guillermo Lasso ■	Alternancia
Perú	11 de abril de 2021 6 de junio de 2021	Francisco Sagasti ●	Pedro Castillo ▲	Alternancia
Nicaragua	7 de noviembre de 2021	Daniel Ortega ▲	Daniel Ortega ▲	Farsa electoral Continuidad
Honduras	28 de noviembre de 2021	Juan Orlando Hernández ■	Xiomara Castro ▲	Alternancia
Chile	21 de noviembre de 2021 19 de diciembre de 2021	Sebastián Piñera ■	Gabriel Boric ▲	Alternancia
Costa Rica	6 de febrero de 2022 3 de abril de 2022	Carlos Alvarado ●	Rodrigo Chaves ■	Alternancia
Colombia	29 de mayo de 2022 19 de junio de 2022	Iván Duque ■	Gustavo Petro ▲	Alternancia
Brasil	2 de octubre de 2022 30 de octubre de 2022	Jair Bolsonaro ■	Luiz Inácio Lula da Silva ▲	Alternancia

Las figuras geométricas indican la filiación ideológica de los presidentes. El triángulo representa un presidente de izquierda o de centro-izquierda, el círculo de centro, y el cuadrado de derecha o de centro-derecha.

FUENTE:Elaboración propia con base en resultados de las elecciones presidenciales.

Voto de castigo a los oficialismos

Los oficialismos han sido repetidamente castigados con el voto en contra en las siguientes elecciones de quienes han querido reelegirse, ellos o sus aliados. La valoración ciudadana del desempeño de sus gobernantes durante los últimos 4 años ha sido marcadamente negativa.

Entre 2019 y noviembre de 2022 se celebraron quince elecciones presidenciales y, si excluimos la farsa electoral de Ortega en Nicaragua, todos los comicios se caracterizaron por un voto de castigo a los oficialismos, de modo que el partido o candidato del partido gobernante fue derrotado en las urnas, como se muestra en la tabla 2.

Menos reelección, más alternancia y ciclos políticos más cortos

La reelección presidencial consecutiva se ha vuelto esquiva para los presidentes latinoamericanos y la alternancia ha acortado los ciclos políticos. En 2019-2022 se reforzó el cambio de partidos en los gobiernos. Desde 2019, ningún presidente que buscó su reelección lo logró: Evo Morales y Mauricio Macri fueron derrotados en 2019 y Jair Bolsonaro en 2022.

La tendencia del voto de castigo a los oficialismos ha traído como secuela un giro de signo ideológico: el regreso de gobiernos progresistas de izquierda, aunque con etiquetas distintas. De las últimas seis elecciones presidenciales sudamericanas (Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Brasil) en cinco ganó la izquierda y únicamente en Ecuador lo hizo la centroderecha liderada por Guillermo Lasso. Solo en tres países de Sudamérica (Ecuador, Paraguay y Uruguay) quedan gobiernos de centroderecha, mientras que siete (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Venezuela) son de izquierda. Con la reciente victoria y retorno al poder de Luiz Inácio *Lula* da Silva en Brasil, hay un escenario regional inédito: las seis principales economías de la región (Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú) estarán gobernadas simultáneamente por líderes de izquierda, si bien con diferencias importantes entre ellos y con un escenario internacional, regional y nacional mucho más complejo que el que había durante la primera “marea rosa” (de 2000 a 2014).

Si en 2023 se mantiene en Argentina la tendencia de voto de castigo al oficialismo y triunfa el centro derecha, se anunciaría el inicio de un nuevo ciclo político-electoral en la región, como ya ocurrió en 2015 con el triunfo de Macri. También deberemos estar atentos a lo que ocurra en las elecciones presidenciales en Guatemala y Paraguay (ambas en manos de gobiernos de derecha) y en los seis procesos electorales de 2024.

Hiperpolarización tóxica

En todos los informes sobre la calidad de la democracia se expresa preocupación por una peligrosa tendencia a la hiperpolarización. En el último lustro se observa un debilitamiento del centro político como campo ideológico y el paso a segunda vuelta de candidatos que representan a los extremos ideológicos. Este fenómeno suele ir acompañado de una hiperfragmentación que permite que candidatos marginales llamen la atención con propuestas radicales y pasen a la segunda vuelta, como ocurrió en Perú en 2021, cuyo balotaje enfrentó a los dos candidatos (Pedro Castillo y Keiko Fujimori)

que representaban los extremos (fujimorismo y un candidato apoyado por un partido marxista-leninista) de entre dieciocho opciones.

Esta hiperpolarización tóxica representa una grave amenaza para la calidad de la democracia; en especial, porque los candidatos extremistas tienden a impulsar medidas antidemocráticas y a cuestionar la institucionalidad y los procedimientos de las elecciones y del sistema democrático. Además, la polarización extrema puede generar niveles peligrosos de violencia política, verbal o física. Hay un ejemplo de ello en las recientes elecciones de Brasil, donde, en comparación con 2018, la violencia electoral se multiplicó por cuatro.

En estos contextos hiperpolarizados, es común que los candidatos derrotados no acepten los resultados, denuncien fraudes inexistentes y emprendan campañas de ataque y desprestigio de las instituciones electorales, como ocurrió en las pasadas elecciones peruanas. Este fenómeno de ataques ilegales e infundados a los organismos electorales y a sus integrantes, en algunos casos desde el poder ejecutivo, es una peligrosa tendencia que viene ganando fuerza en nuestra región. Resaltan dos casos: Brasil y México. El primero, por las infundadas acusaciones del presidente Bolsonaro contra el Tribunal Superior Electoral y la urna electrónica (que en más de 20 años de uso no ha registrado problemas y ha superado todas las auditorías). El segundo, por la campaña constante de ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral, y por su deseo de reformarlo para acabar con su independencia, autonomía y rigor técnico.

Amenaza de populismo

Con mayor frecuencia se observa la irrupción de candidatos populistas (de derecha o de izquierda) que se caracterizan por dividir a la sociedad en campos de batalla: “nosotros contra ellos”. Ese “ellos” suele ser descrito como una élite, casta o clase social a la cual se le imputan todos los males del país. Se caricaturiza a los oponentes y se apuesta por la polarización extrema.

En esta tendencia, la política se interpreta como un conflicto permanente que enfrenta modos irreconciliables de entender el mundo. Quienes apelan al populismo corroen las bases institucionales y organizacionales de la representación y privilegian las relaciones directas con los seguidores, con tintes mesiánicos y personalistas, y amenazan con una deriva autoritaria.

Uso creciente del balotaje y reversión del resultado

En los últimos tiempos, en la mayoría de los países que prevén una segunda vuelta se llegó a este recurso y, también con mayor frecuencia, se revirtió el resultado de la primera vuelta. En Latinoamérica, en doce países hay balotaje: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay, si bien con diferencias importantes. Como se observa en la tabla 3, de las últimas elecciones presidenciales celebradas ahí, en ocho países fue necesario ir a la segunda vuelta para definir al presidente: Brasil (2022), Chile (2021), Colombia (2022), Costa Rica (2022), Ecuador (2021), Guatemala (2019),

Tabla 3: Resultados de las segundas vueltas en Latinoamérica, 2019-2022

País	Primera vuelta		Diferencia	Segunda vuelta		Diferencia	Reversión del resultado
	Candidato	Porcentaje		Candidato	Porcentaje		
Perú 2021	Pedro Castillo 18.92%	Keiko Fujimori 13.41%	5.5%	Pedro Castillo 50.13%	Keiko Fujimori 49.87%	0.26%	No
Uruguay 2019	Daniel Martínez 39.02%	Luis Lacalle Pou 28.62%	10.4%	Luis Lacalle Pou 50.79%	Daniel Martínez 49.21%	1.58%	Sí
Brasil 2022	Luiz Inácio Lula da Silva 48.43%	Jair Bolsonaro 43.20%	5.23%	Luiz Inácio Lula da Silva 50.90%	Jair Bolsonaro 49.10%	1.80%	No
Colombia 2022	Gustavo Petro 40.34%	Rodolfo Hernández 28.17%	12.1%	Gustavo Petro 50.44%	Rodolfo Hernández 47.31%	3.13%	No
Ecuador 2021	Andrés Arauz 32.72%	Guillermo Lasso 19.74%	12.9%	Guillermo Lasso 52.36%	Andrés Arauz 47.64%	4.7%	Sí
Costa Rica 2022	José María Figueres 27.28%	Rodrigo Chaves 16.78%	10.5%	Rodrigo Chaves 52.82%	José María Figueres 47.18%	5.64%	Sí
Chile 2021	José Antonio Kast 27.91%	Gabriel Boric 25.83%	2.08%	Gabriel Boric 55.87%	José Antonio Kast 44.13%	11.7%	Sí
Guatemala 2019	Sandra Torres 25.53%	Alejandro Giammattei 13.96%	11.5%	Alejandro Giammattei 57.95%	Sandra Torres 42.05%	15.9%	Sí

FUENTE: Elaboración propia con base en resultados de las elecciones presidenciales.

Perú (2021) y Uruguay (2019); las excepciones fueron Argentina y El Salvador, en 2019, y Bolivia y República Dominicana, en 2020. De los últimos ocho balotajes en la región (Guatemala y Uruguay en 2019, Ecuador, Perú y Chile en 2021, y Costa Rica,

Colombia y Brasil 2022), en cinco se revirtió el resultado de primera vuelta (62.5%; las excepciones fueron Perú en 2021, y Colombia y Brasil en 2022).

Fragmentación y presidencialismo de coaliciones

La falta de confianza ciudadana en los partidos y la creciente personalización de la política han acentuado la crisis de representación y de legitimidad de los sistemas de partidos en muchos países latinoamericanos. Como consecuencia, los lazos de los partidos tradicionales con la ciudadanía se han debilitado, al tiempo que han surgido nuevas expresiones políticas, algunas como meros vehículos electorales de líderes personalistas y otras como verdaderas organizaciones que buscan representar genuinamente una amalgama de intereses desatendidos. En algunos países también han aumentado las candidaturas presidenciales independientes, de modo que el número de partidos y de candidatos a la presidencia se ha incrementado considerablemente. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de Costa Rica (2022) hubo veinticinco candidatos, de los cuales catorce obtuvieron menos de 1% de los votos, incluido el candidato oficialista. Algo similar ocurrió en Ecuador (2021), donde se presentaron dieciséis candidatos y solo cuatro superaron el 3%, y en Perú (2021) compitieron dieciocho candidaturas presidenciales y ningún candidato superó el 20% en la primera vuelta.

Los congresos también están más fragmentados y los presidentes que llegan con partidos minoritarios (o de reciente creación) deben establecer coaliciones amplias para gobernar. La gobernabilidad en esta situación es preocupante y problemática, porque los mandatarios que no tienen mayoría propia, para avanzar su agenda tienen que formar coaliciones, que por lo general son heterogéneas y volátiles, con pocas coincidencias programáticas, y que terminan produciendo divisiones internas, choques entre poderes e inestabilidad ministerial y gubernamental. Los dos ejemplos actuales más claros —pero no los únicos— son el gobierno del presidente Lasso en Ecuador y el del presidente Castillo en Perú. En este último país, en menos de un año de gobierno ya ha habido dos intentos por remover al presidente y hay un tercero en marcha.

Creciente contaminación informativa en las campañas

Las noticias falsas y las campañas de desinformación se han vuelto comunes. Estas tácticas son utilizadas por los candidatos, pero también por gobiernos que quieren inmiscuirse en las elecciones de otros países. De igual modo, preocupan las crecientes intervenciones de agentes internacionales en elecciones extraterritoriales mediante piratas informáticos (detectados por el gobierno estadounidense en varias elecciones recientes).

Las redes sociales han cobrado una importancia y una presencia cada vez mayores. Sus efectos en la política, las elecciones y la democracia son tanto positivos como negativos. Por un lado, más personas se informan en las redes sobre la situación política y las propuestas de los candidatos. Asimismo, su uso ayuda a horizontalizar la comunicación política y a reducir los costos de las campañas. Por el otro, se corren riesgos graves y crecientes cuando las redes sociales son utilizadas para desinformar,

dividir y propagar mensajes de odio, como ocurrió recientemente en los comicios brasileños. En efecto, cuando los mensajes de las redes sociales son mayoritariamente negativos (con emociones de ira, miedo y desconfianza), reproducen la polarización y cierran las vías de comunicación, lo que impide el diálogo político constructivo, con los consiguientes efectos adversos sobre los procesos electorales y la democracia. Cómo hacer frente a esta nueva amenaza sin violentar la libertad de expresión es hoy uno de los principales desafíos para el sistema democrático en general y para los organismos electorales en particular.

CONCLUSIONES

La democracia en Latinoamérica muestra signos mixtos de resiliencia y deterioro. En un contexto de numerosas crisis, el escenario para los próximos años se prevé complejo y problemático. Hay que prepararse para enfrentar tiempos recios.

Latinoamérica ha sido la región más castigada por la pandemia de covid-19, que ha dejado una estela de retrasos económicos y de desarrollo humano. La desconfianza ciudadana generalizada con respecto a las élites, las instituciones y el sistema político en su conjunto ha impregnado las relaciones entre las personas y ha afectado a las organizaciones sociales, lo que contribuye a debilitar la calidad de la democracia.

Igualmente, la democracia sufre el asedio de líderes populistas y autoritarios que, una vez que llegan al poder por medio de elecciones, la socavan desde dentro. La crisis político-institucional y de gobernanza de Latinoamérica es de las más desafiantes desde que inició la tercera ola democrática hace ya 43 años. Por eso es importante fortalecer no solo la legitimidad de origen, sino también la legitimidad de ejercicio, como prescribe la Carta Democrática Interamericana.

La región debe dar la prioridad a tres ámbitos. En primer lugar, se debe mantener y fortalecer la resiliencia electoral para garantizar la legitimidad de origen, como se hizo durante la pandemia, cuando pese a los monumentales desafíos, los países de la región tuvieron la capacidad de celebrar elecciones con parámetros altos de bioseguridad e integridad electoral. Es por ello crucial blindar la autonomía de los organismos electorales de los crecientes ataques provenientes del ejecutivo y de los partidos políticos oficialistas o de oposición.

Segundo, hay que recuperar la confianza ciudadana en las élites y las instituciones, y abrir nuevos canales de escucha, diálogo y participación ciudadana. Es preciso reimaginar el papel del ciudadano y sumar a su condición de elector otras dimensiones de carácter participativo y deliberativo que le confieran un protagonismo mayor y más frecuente en la toma de decisiones y la formulación de las políticas públicas.

Y en el tercer ámbito, la democracia debe estar aunada a un buen gobierno, un Estado moderno, robusto y estratégico, y una gobernanza eficaz que dé resultados concretos y oportunos a los problemas reales de la gente.

En el nivel regional, es necesario poner al día y reforzar los mecanismos de protección de la democracia para que complementen y apoyen a los de nivel nacional.

Debe darse la mayor importancia a actualizar y fortalecer la Carta Democrática Interamericana y a generar un nuevo consenso regional, de ancha base política, en defensa de la democracia, los procesos electorales transparentes y con integridad, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la plena vigencia del Estado de derecho.

Esta es la agenda que Latinoamérica necesita acordar y poner en marcha con urgencia, para repensar la democracia, revalorizar la política, acelerar la innovación política-institucional, fortalecer los mecanismos de participación y deliberación ciudadana e incorporar de manera inteligente las nuevas tecnologías digitales al ámbito político, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la política, sus instituciones y líderes y, al mismo tiempo, fortalecer la gobernanza de las sociedades complejas del siglo XXI.

No hay tiempo que perder. Los mandatarios deben aprender a gobernar en contextos de complejidad, incertidumbre y volatilidad, a producir resultados rápidamente para dar respuestas oportunas a las altas expectativas y nuevas demandas de una ciudadanía cada vez más empoderada y exigente, y a recuperar la confianza perdida. Si no lo logran, como se observa en varios países de la región, la frustración ciudadana amenaza con excitar una nueva ola de protestas sociales que aumenten los riesgos políticos y la inestabilidad, generen crisis de gobernabilidad y acentúen el deterioro o, peor aún, profundicen el retroceso democrático. Como aconsejaba Albert O. Hirschman, hoy más que nunca es preciso “poner las intenciones en lo posible, más que en lo probable”. 